



**AMPARO EN REVISIÓN 845/2000.
QUEJOSO: SABINO CASTREJÓN
MARQUINA.**

**MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE
ANGUIANO.
SECRETARIO: FRANCISCO OLMOS AVILEZ.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
veintiséis de enero de dos mil uno.

Vo. Bo.

COTEJO

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- En escrito presentado el dieciocho de abril de
dos mil, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de
Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco,
Sabino Castrejón Marquina, por su propio derecho, promovió
demanda de amparo indirecto contra de las autoridades y por los
factos que a continuación se precisan:

**"AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- H.
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, con**

domicilio en el edificio de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, ubicado en Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac s/n, Colonia Centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. --- B).- C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, con domicilio en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, ubicado en Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac s/n, Colonia Centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. --- C).- C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, con domicilio en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, ubicado en Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac s/n, Colonia Centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. --- d).- C. DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, con domicilio bien conocido en la Plaza Cívica Juan N. Alvarez, s/n, Colonia Centro de esta ciudad de Acapulco, Guerrero."

"ACTOS RECLAMADOS: --- 1.- Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, reclamo: A).- La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV.--- 2.- Del C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, reclamo: --- A).- La promulgación y



orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV.---

3.- Del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, reclamo: a).- El refrendo y la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV.---

4.- Del C. DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

A).- La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV. --- B).-

El oficio 88 de fecha 2 de marzo del 2000, mediante el cual declara improcedente la inscripción del embargo relativo al expediente laboral número

del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. --- C).- La

negativa implícita de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 962 de la Ley Federal del Trabajo, relativa a la inscripción del embargo

relativo al expediente laboral número del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje. --- D).- La negativa implícita de otorgar la prelación de derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil

del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas

RTE DE
NACION
SALA

del día 15 de febrero del 2000, respecto del embargo relativo al expediente laboral del

índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje".

La parte quejosa expresó los antecedentes del caso que a continuación se transcriben:

"Mediante escrito de fecha 25 de julio de 1998, el quejoso hizo valer demanda ordinaria laboral en contra de los terceros perjudicados, la cual se radicó bajo el número [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; se emplazó a las partes; se siguió la secuela procesal en todas y cada una de sus etapas y; el día 18 de diciembre de 1998 se dictó laudo condenatorio. Mediante acuerdo de 7 de mayo de 1999 se dictó auto de ejecución y, el 11 de enero de 2000 se realizó la diligencia de requerimiento de pago y al no haberse efectuado el mismo, se trabó formal embargo sobre el bien inmueble propiedad de los condenados, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo folio de derechos reales [REDACTED] de 8 de enero de 1992, correspondiente al Distrito de Tabares. --- Atento al contenido de la diligencia de embargo de 11 de enero de 2000 y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 962 de la Ley Federal del Trabajo, se solicitó la inscripción del embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cual se



obsequió en acuerdo de 27 de enero de 2000 y en oficio 244 de 28 de enero de 2000 el C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (sic), con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19 y 962 de la Ley Federal del Trabajo, solicitó al Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad la inscripción del embargo de referencia. --- Ante la solicitud mencionada el C. Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio emitió el oficio 88 de 2 de marzo de 2000, en que declaró improcedente la inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fundándose en lo dispuesto por Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV. --- Del oficio reseñado con anterioridad, dio cuenta el C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (sic) en acuerdo de 16 de marzo de 2000, el cual se me notificó personalmente el 28 de marzo de 2000. --- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 y 47, fracciones I, III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el Congreso del Estado de Guerrero, aprobó y expidió la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV, que se

10/03/2000
ACU

impugna de inconstitucional, por encontrarse en contravención a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se señalaron como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, constitucionales y se expusieron los siguientes conceptos de violación:

“PRIMERO.- Los actos del Congreso del Estado de Guerrero; del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; del Secretario General de Gobierno y; del C. Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que se les imputan, en relación con el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000 y el propio artículo en mención, son violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, son de naturaleza anticonstitucional. --- El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, literalmente dice: --- ‘ARTÍCULO 22.- Los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, causarán derechos conforme a la tasa, tarifas y cuotas siguientes: IV.- La inscripción o la



reinscripción de todo tipo de embargos incluyendo los laborales y fiscales, así como providencias precautorias, a excepción de la de alimentos y avisos preventivos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 2889 del Código Civil, se causará sobre el monto de los mismos 4 al millar'. -

-- El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, a cuyo texto literal me remito como si lo insertase a la letra, de su contenido se aprecia que atenta en contra de lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atenta también en contra de los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. --- En efecto, el artículo 1º de la Constitución General de la República establece la garantía fundamental de igualdad, que consiste en el hecho de que todo individuo gozará de las garantías que dicha Constitución otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, casos y condiciones éstos a que se contrae el artículo 29 de la propia Carta Magna, en el que de manera específica se establecen los casos de excepción en los que pueden suspenderse el disfrute y goce de dichas garantías. --- Los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución General de la República, establecen



CORTE DE
A NACIÓN,
A SALA
ACUERDOS.

en forma literal lo siguiente: --- 'Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece'. --- 'Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. --- En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. --- En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho'. --- 'Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. --- No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia acusación o querella de un



hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. --- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. --- En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. --- Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. - -- En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. --- Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo

ORTE en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a
A NACIÓN,
I SALA
ACUERDOS.

disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. --- En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. --- Las comunicaciones privadas son inviolables: La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Exclusivamente la autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad Federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad Judicial Federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil,



civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. --- Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. --- La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. --- La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. --- En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente'. --- 'Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

LIBRO DE
RECIBOS
DE LA
SECRETARÍA DE
JUSTICIA

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. --- Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. --- Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil'. --- 'Artículo 29.- En los casos de invasión perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde'. --- 'Artículo.- 73.- El Congreso



tiene facultad: --- X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123'. --- Los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, señalan: --- 'Artículo 19.- Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno'. --- 'Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. -- Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley'. --- 'Artículo 962.- Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad'. --- 'Artículo 975.-

SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERAL
ACUERDOS

Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: --- b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales'. --- Por otro lado, los artículos 24 y 47, fracciones I, III y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen literalmente que: --- 'ARTÍCULO 24.- El Estado de Guerrero es libre y soberano en su régimen interior y podrá darse las leyes necesarias para su organización y desarrollo, sin contravenir lo estipulado por la Constitución Federal'. --- 'ARTÍCULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado: I.- Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; --- III.- Elaborar las leyes locales cuya expedición haga obligatoria la Constitución Federal; --- IV.- Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, señalando las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto', --- De los preceptos transcritos con anterioridad, para lo que nos interesa, se desprende que la Legislatura del Estado de Guerrero, se encuentra facultada para legislar o darle vida jurídica a la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, más no con una facultad omnímoda, sino sujeta a lo



dispuesto por los artículos 1º, 14, 16, 17, 29, 73, fracción X, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se debe afirmar que el análisis de la constitucionalidad del artículo 22, fracción IV, debe de hacerse frente a esas normas. --- Al respecto, es necesario precisar que del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, se desprende que los Congresos Locales de acuerdo al contenido de los artículos 73 y 124 del Ordenamiento Supremo indicado, se encuentran autorizados para expedir las leyes de ingresos de las diversas Entidades Federativas, sin embargo, es evidente que sólo pueden expedir dichas leyes de ingresos, siguiendo en lo conducente, las bases que establecen los artículos 1º, 14, 16, 17, 29, 73, fracción IV, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de comprender a otros sujetos o relaciones las mismas incurrirían en inconstitucionalidad. --- Es el caso de que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución General de la República, es facultad reservada al Congreso de la Unión la relativa a legislar en toda la República para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de dicha Constitución y que en acopio a dicha facultad se expidió la Ley Federal del Trabajo, en la que se estableció la gratuidad del procedimiento

COLEGIO DE
NACIONES
SALA
DE REVISION

laboral, el hecho de que se haya legislado en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, se objetiva una ley y actos de autoridad que invaden la esfera de la autoridad federal, en contravención de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, porque los Congresos de los Estados, sólo pueden legislar en todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión o a cualquiera de sus cámaras, porque es claro que las leyes federales que emanen del Congreso son de jerarquía superior, conforme al artículo 133, a las leyes locales que se dicten por los Congresos Locales, lo que hace lógico que, en caso de contradicción en sus disposiciones, deba prevalecer la dictada con jerarquía federal. Es cierto que conforme a nuestro sistema constitucional, en la forma en que ha sido interpretado por la jurisprudencia y por la doctrina, se debe entender que, en principio, hay concurrencia de facultades impositivas sobre las mismas fuentes, entre la Federación y los Estados. La Federación tiene facultades conforme al artículo 73 de la Constitución Federal para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Y esta facultad, así otorgada en términos generales, no tiene cortapisas con respecto a impuestos directos e indirectos, ni respecto de actos celebrados en los Estados y regidos por sus



leyes locales. En cambio, a los Estados sí les está prohibido expresamente imponer impuestos al comercio exterior y del timbre, así como los demás gravámenes a que se contraen los artículos 117, 118 y 131 de la misma Constitución. Y en cuanto a las fuentes gravables a que se refiere la fracción XXIX del artículo 73, se ha entendido que se trata de impuestos que sólo puede imponer el Congreso de la Unión, pero en los que los Estados tienen derecho a participar en la proporción que dicho Congreso fije. Siendo de notarse que el hecho de que en ese Congreso estén representadas todas las entidades federativas puede, teóricamente, nivelar los intereses de la Federación y de los Estados, por lo que si la Federación al expedirse la Ley Federal del Trabajo, determinó la gratuidad de todos los actos relacionados con el procedimiento laboral, no existe ninguna justificación legal para que el Congreso del Estado de Guerrero, haya legislado para gravar en parte dicha actividad jurisdiccional. --- Congruente con lo anterior, procede se conceda a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal que reclaman respecto de los actos de autoridad que se refieren en este concepto de violación y se declare la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000. --- SEGUNDO.- Los actos que se le imputan al Delegado Regional del

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ORTE DE LA
NACION,
L. SALA
ACUERDOS.

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, consistentes en la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV; el oficio 88 de 2 de marzo de 2000, mediante el cual declara improcedente la inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; la negativa implícita de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 962 de la Ley Federal del Trabajo, relativa a la inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y; la negativa implícita de otorgar la prelación de derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del día 15 de febrero de 2000, respecto del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, son violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, son de naturaleza anticonstitucional y violan en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad de que es sujeto dicho quejoso, por no encontrarse fundados ni motivados y son contrarios a lo que disponen los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. --- En efecto, la determinación



del Delegado del Registro Público de la Propiedad, que declara improcedente el registro o inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mismo que fue descrito a plenitud en el rubro de antecedentes de esta demanda de garantías, es contrario a lo dispuesto por los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la gratuidad de todos los actos derivados del procedimiento laboral, pues al aplicar el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, grava los actos de dicho procedimiento del trabajo y desatiende el principio de supremacía de Ley Federal del Trabajo, con respecto al ordenamiento estatal que invoca, acarreado como consecuencia y en perjuicio de la parte trabajadora que no se objetive la prelación derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del 15 de febrero de 2000, en que se presentó el oficio 244 de 28 de enero de 2000, por el C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (sic), quien con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, solicitó la inscripción del embargo realizado el 11 de enero de 2000, en el expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Arbitraje. --- Congruente con lo anterior, procede se conceda al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se inscriba el citado embargo sin el pago de derechos y se estime la prelación de derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del 15 de febrero de 2000, en que se presentó el oficio 244 de 28 de enero de 2000, al C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje".

TERCERO.- El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante acuerdo de dieciocho de abril del dos mil, admitió la citada demanda de amparo (fojas 14 del cuaderno de amparo), la cual registró bajo expediente [REDACTED]. Tramitado el juicio de amparo por todas sus etapas, dictó sentencia que terminó de engrosar el diecinueve de mayo siguiente, la cual concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO .- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Sabino Castrejón Marquina, por los actos y respecto de las autoridades indicadas en el resultando primero de esta resolución".

Las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para resolver en ese sentido son las siguientes:

"PRIMERO.- Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para



conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se reclama la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de dos mil. --- **SEGUNDO.-** Son ciertos los actos atribuidos al Congreso, Gobernador y Secretario General ~~de~~ Gobierno, todos pertenecientes al Gobierno del Estado de Guerrero, consistentes respectivamente, en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de dos mil, cuyos preceptos se tildan de inconstitucionales, pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes con justificación (folios 20, 23 y 26) y, además, porque tales actos de formación legislativa se acreditan plenamente con la propia ley controvertida que no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, criterio que se robustece con el sustentado en la tesis aislada V.2º. 214 k, visible en la página 205 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-I, febrero de 1995, que expresa: **LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.** El juzgador

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
PARTES DE
NACIONAL
SALVADORENSES
ACUERDOS

de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba'. --- De igual manera la Delegada Regional del Registro Público de la Propiedad, al rendir su respectivo informe justificado, reconoció como cierto el acto que se le atribuye, que se hace consistir en la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de dos mil, específicamente su artículo 22, fracción IV, a través de la expedición del oficio 88, de dos de marzo del actual, por el que se suspendió el trámite de inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] que se tramita ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. --- Como además del reconocimiento anterior dicha responsable remitió en apoyo a su informe con justificación la copia certificada del oficio de mérito, que obra a foja treinta y tres del sumario, este juzgador estima que existen datos suficientes que acreditan la certeza del acto que a la autoridad responsable en comento se reclama. --- TERCERO.- En relación con la ley reclamada, el Secretario General de Gobierno propone la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues a su entender el quejoso promovió la demanda de garantías fuera de los plazos previstos al efecto en



los artículos 21 y 22, fracción I, de la Ley de Amparo. --- Con el objeto de analizar si tales causas de improcedencia resultan eficaces, se tiene en cuenta en primer lugar que de acuerdo con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Amparo el término para la interposición de la demanda respectiva es de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación del acto reclamado; al ~~en~~ que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por su parte el diverso numeral 22, fracción I, ~~de~~ la propia ley reglamentaria dispone que en los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamada en la vía de amparo, el término para la interposición de la demanda será de treinta días. --- No estamos ante ~~el~~ caso de tomar en consideración el contenido del artículo 22 de la Ley de Amparo, pues dicho ~~dispositivo~~ únicamente regula el plazo para impugnar leyes autoaplicativas, es decir, aquellas ~~que~~ causan perjuicio por su sola vigencia, en la especie, por el contrario, de los antecedentes vertidos en el libelo inicial aparece claramente que el quejoso ocurrió a controvertir la constitucionalidad de la ley reclamada con motivo de un acto concreto de aplicación en su perjuicio; hipótesis que implica, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción XII, del artículo



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CORREO DE
LA NACIÓN
D.F.
E. ACU.

73, de la Ley de Amparo, que no se puede estimar como consentida tácitamente la ley impugnada. --- El mencionado numeral establece lo siguiente: --- 'Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: '(...) 'XII. Contra actos consentidos tácitamente' --- 'No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnabile en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso'. --- Así entonces, el quejoso escogió combatir la ley que estima inconstitucional hasta el momento en que se sintió agraviado, derecho que le asiste en virtud del contenido del citado artículo 21, en relación con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, que desde luego, no se afecta por no haber reclamado aquella ley por su sola vigencia. --- Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Secretario General de Gobierno señala a este resolutor que la demanda fue presentada fuera del término de quince días que concede el artículo 21 de la Ley de Amparo para intentar la acción de garantías, circunstancia tal que, sin embargo, no aparece demostrada de las constancias que obran en autos. --- El quejoso manifestó, bajo protesta de decir



verdad, en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, que tuvo conocimiento del oficio que constituye el primer acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional hasta el momento en que se le notificó personalmente el acuerdo que lo tuvo por recibido en el juicio laboral [REDACTED] a saber el veintiocho de marzo del año en curso. --- Por disposición del artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, las notificaciones personales surtirán sus efectos el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley. En tal virtud, el término para la interposición del amparo comenzó a contarse y a correr el veintinueve de marzo del presente año, y por lo tanto feneció a las veinticuatro horas del dieciocho de abril siguiente. --- Ya se ha visto en el resultando primero de esta resolución que la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes de este Juzgado precisamente el día dieciocho de abril, es decir, aún dentro del término legal para ello, motivo por el cual debe desestimarse la causa de improcedencia hecha valer. --- Sin perjuicio de lo antes considerado, cabe destacar que en el sumario no obra la constancia de notificación que acredite que el quejoso conoció el acto reclamado exactamente en la fecha que se indica en la demanda de garantías



CORTE DE
LA NACIÓN,
A SALA
ACUERDOS.

correspondiente, pero tal circunstancia no puede repercutir en su perjuicio, pues precisamente ante la falta de certeza de que el acto reclamado le fue notificado en una fecha distinta a la que señaló, no es jurídico concluir que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, pues es de explorado derecho que las causas de improcedencia deben estar demostradas fehacientemente. --- En ese sentido se ha pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al integrar la tesis de jurisprudencia número V. 2º. J/18, consultable en la página 610 del tomo III, Junio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: --- 'IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.' --- Ahora bien, respecto al acto concreto de aplicación de la ley, la Delegada Regional del Registro Público de la Propiedad sostiene que el juicio es improcedente porque el quejoso no agotó el recurso administrativo previsto en el artículo 73 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dejando de observar así el principio de definitividad que norma el procedimiento de amparo. --- Sin embargo tal



argumento debe considerarse infundado, pues dicho principio solamente debe ser observado cuando se tiene obligación de hacerlo, y en el caso de amparo contra leyes, como el que ahora se estudia, opera una excepción que exime al quejoso de agotar los recursos con los que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, la cual se encuentra contenida en el tercer párrafo del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: --- 'Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.' --- Por ello, no estando obligado el quejoso a observar el principio de definitividad, la consecuencia jurídica de no haberlo hecho en forma alguna acarrea la de que el juicio se considere improcedente, motivo por el cual debe también desestimarse la causa hecha valer por la autoridad responsable inmediatamente antes indicada. --- Así las cosas, no habiendo más causales de

SECRETARÍA DE JUSTICIA
CORTES DE LA NACIÓN
A SALA
DE ACUERDOS.

improcedencia anunciadas ni advirtiéndose otras de oficio, procede entrar al estudio relativo a la constitucionalidad del acto reclamado. --- CUARTO.- Es importante precisar que la naturaleza jurídica del acto reclamado --que por lo tanto determina la del amparo-- es la de una ley fiscal, aplicada con motivo concreto de un acto de naturaleza administrativa y no laboral. En consecuencia, cabe concluir que en el presente caso estamos únicamente frente a un amparo contra leyes, es decir, en materia constitucional y no ante un amparo en materia laboral, con absoluta independencia de que el acto administrativo que le da origen se haya producido con la concurrencia indirecta de un procedimiento del trabajo. --- La importancia de señalar lo anterior estriba en que al tratarse de un amparo en materia fiscal, el estudio relativo a la constitucionalidad de la ley reclamada debe realizarse sin suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que es el que prevé esta institución, ninguna prevención contiene en relación con el amparo contra leyes. --- La figura de la suplencia de la queja --como en general todo el sistema de garantías sociales característico de la Constitución Mexicana de mil novecientos diecisiete-- descansa en la teleología de equilibrar procesalmente a las partes que por pertenecer a grupos socioeconómicos distintos, se encuentran



una frente a la otra en condición de desventaja. Así, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional contiene un ideal de justicia distributiva que puede enunciarse en la locución aristotélica de 'dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales'. --- En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el quejoso es un trabajador y que con motivo de un juicio laboral debió inscribir un embargo en el Registro Público de la Propiedad, la posición que guarda frente a las autoridades administrativas no es distinta a la de cualquier otro gobernado. Es decir, que el hecho de ser trabajador no lo coloca en una situación de desigualdad que requiera ser equilibrada, pues frente a él no tiene a un patrón o a una autoridad del trabajo, sino a otras de naturaleza administrativa y legislativa que le procuran un trato igual que el dispensado a cualquier otro usuario de los folios registrales, sean trabajadores, patrones, campesinos o menores. --- Así las cosas, no hay razón para dejar de aplicar el principio de estricto derecho que rige en materia de amparo y muy especialmente en el de amparo contra leyes, pues no sería jurídico proporcionar arbitrariamente al quejoso una mejor defensa ante el legislador por el hecho accidental de que se trate de un trabajador, pues tal cualidad en nada incide en su posición frente a la ley cuya constitucionalidad se cuestiona. --- Robustece la consideración anterior

ORTE DE
NACION
SALA
CUERDOS

4

2



de Guerrero, lo que a su juicio atenta contra el principio de gratuidad que rige en materia de derecho del trabajo, según prevención expresa de los artículos 19 y 685 de la Ley Federal del Trabajo.

--- Considera el quejoso que con la expedición de la ley reclamada la Legislatura Local del Estado de Guerrero viola directamente el citado código laboral y con ello también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a su juicio se irrumpe indebidamente en la esfera de competencia exclusiva de la Federación para legislar en materia del trabajo y se desconoce la jerarquía superior de la legislación federal sobre la local. --- El argumento central del quejoso puede tal vez sintetizarse en una expresión contenida en la parte final del primer concepto de violación expresado en su demanda de garantías, que en la parte conducente dice textualmente lo siguiente: '... si la Federación al expedirse la Ley Federal del Trabajo, determinó la gratuidad de todos los actos relacionados con el procedimiento laboral, no existe ninguna justificación legal para que el Congreso del Estado de Guerrero, haya legislado para gravar en parte dicha actividad jurisdiccional.'

--- Pues bien, por principio de cuentas resulta inatendible el argumento que antecede debido a que la inconstitucionalidad de una ley no puede hacerse depender de las contradicciones que surjan con otras leyes secundarias, ya que dicha

SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERAL
RTE DE
NACION,
SALA
CUERDOS.

inconstitucionalidad está en función a la transgresión directa de los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- De acuerdo con lo expuesto en el párrafo precedente, si los argumentos del quejoso se encaminan a demostrar la inconstitucionalidad del precepto impugnado, sobre la base de que tal precepto impone una contribución sobre la inscripción de embargos en el Registro Público de la Propiedad, gravamen que -a su juicio- está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, incurriendo por lo tanto el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, en una violación a dicha ley federal, entonces, tales argumentos no implican propiamente un problema de constitucionalidad. --- En efecto, cuando el juicio de amparo cumple la función de control de la regularidad constitucional de leyes u ordenamientos de carácter general, no pueden admitirse como objeto de estudio violaciones que no sean directas al texto de la Constitución, pues es precisamente la oposición entre el texto de la ley secundaria y los preceptos constitucionales la única susceptible de ser advertida y en su caso reprimida por los Tribunales Constitucionales, a diferencia de aquéllos otros casos en los que las violaciones indirectas a la Constitución sí pueden llegar a analizarse, como sucede por ejemplo cuando el amparo es un medio de control de la



legalidad, en donde si un acto de autoridad viola una disposición de la legislación secundaria, puede también estimarse que indirectamente transgrede las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales. --- Pero como ya se ha dicho, cuando lo que se impugna es la inconstitucionalidad de una ley, tal condición debe considerarse actualizada, única y exclusivamente, si es que la ley que se reclama está en contradicción directa e inmediata con un dispositivo constitucional, pero nunca con uno de la ley secundaria, y menos aún con alguno de los principios consagrados en ésta. --- Sirve de apoyo a la consideración que antecede la tesis de jurisprudencia número P.J. 25/2000, recientemente integrada por el Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página treinta y ocho, que a la letra dice: --- **LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.** La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias. --- Pues bien, dicho lo anterior resulta que el concepto de violación expresado debe desatenderse por inoperante, dado que aún suponiendo que efectivamente existiese alguna contradicción entre el principio de gratuidad del procedimiento laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo y el artículo 22, fracción IV, de la Ley de



TE DE
NACION,
SALA
JERDOS.

Ingresos del Estado de Guerrero, ello en forma alguna significaría que éste sea inconstitucional. --- Por otra parte, tampoco son atendibles los conceptos de violación expresados, pues si bien es cierto que el quejoso afirma en ellos que la ley reclamada viola los artículos 1º, 14, 16, 17 29 y 73, fracción X, de la Constitución, no es menos cierto que en dichos conceptos no se expresa, de manera autónoma, por qué motivo los consideraba transgredidos, pues la inconstitucionalidad que el quejoso acusa la hace depender de la supuesta contravención entre la Ley Federal del Trabajo y la reclamada. --- Un análisis detallado de los conceptos de violación así lo revela. Aunque el quejoso cita y transcribe todos los dispositivos constitucionales invocados, lo cierto es que todo su argumento está encaminado a demostrar que la inconstitucionalidad aludida no opera en función a que se trastoque alguna garantía constitucional, sino a que no se observa puntualmente la jerarquía del orden jurídico mexicano, en el que, según lo interpreta el quejoso, existe la preeminencia de la legislación federal sobre la local. --- No estamos ante el caso de abordar a profundidad la cuestión planteada, en primer lugar porque en México el derecho federal y el local tienen la misma jerarquía; es decir, el uno no priva sobre el otro y, por ello, cuando existe alguna aparente contradicción entre una norma federal y una local, el problema debe



resolverse atendiendo simplemente a la esfera de competencia de cada autoridad en relación con la materia de que se trate. --- Así se ha pronunciado ya no sólo una parte importante de la doctrina constitucional mexicana (Carpizo, De la Cueva, Gaxiola, Salceda y Villoro, entre otros) sino la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su entonces Tercera Sala, al integrar la tesis de jurisprudencia número 3a. ~~XXI~~ 10/91, publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Marzo, cuyos rubro y texto son los siguientes: --- 'LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad

ORTE DE
NACION
SALA
ACUERDOS

local o federal actúa más allá de su competencia constitucional.'. --- Pero como líneas antes se ha venido exponiendo, resulta innecesario abundar sobre si es que existe o no una relación jerárquica entre la Ley Federal del Trabajo y la de Ingresos del Estado de Guerrero, o alguna violación de esferas de competencia, porque a nada práctico conduciría efectuar tal estudio, habida cuenta que no es de dichas circunstancias de la que depende la inconstitucionalidad de una ley, sino de su oposición con un precepto de la Constitución. --- En este caso el quejoso decidió sostener qué dispositivo legal reclamado viola el principio de gratuidad que establece la Ley Federal del Trabajo, y aunque puede considerarse que dicho principio emana directamente de la parte final del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que el quejoso no lo planteó así, y como el estudio de los conceptos de violación en este juicio debe hacerse acatando el principio de estricto derecho, que constriñe al Tribunal a sujetarse exclusivamente a lo expresado en la demanda, lo único que cabe concluir es que lo planteado en ella es inoperante, motivando así la negativa del amparo solicitado. --- SEXTO. En el segundo concepto de violación el quejoso sostiene que el oficio número ochenta y ocho del dos de marzo del año en curso no se encuentra fundado ni motivado y contraviene

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 1
S. L.
SECRETARÍA DE

64



además lo dispuesto por los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. --- Respecto del primer argumento, es decir, el que atiende a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, debe decirse que resulta infundado, pues con toda claridad puede advertirse que en el texto del oficio de referencia aparece tanto la cita del precepto legal aplicable al caso, como la razón o causa inmediata por la cual la responsable estima que dicho dispositivo se adecua al caso concreto. --- En efecto, en el oficio en cuestión se consignó literalmente que: --- '... no procede a lo solicitado, toda vez que para dar cumplimiento a lo solicitado, deberá acreditar con el recibo oficial haber realizado el pago por concepto de derechos de Registro Público de la Propiedad.- Con fundamento en el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.'. --- Como puede apreciarse de lo transcrito, el motivo para negar la inscripción fue la falta de pago de los derechos correspondientes y su fundamento fue precisamente el artículo de la Ley de Ingresos que el quejoso considera inconstitucional, es decir, el que establece la causación respectiva. Habida cuenta que ambos elementos -fundamento y motivo- constan por escrito y existe además la necesaria actualización de la hipótesis normativa al caso concreto, no hay motivo para considerar que no existe fundamentación y motivación, máxime



CORTE DE
NACION
SALA
ACUERDOS.

que lo que el quejoso acusó fue la ausencia de éstas y no su deficiencia. --- Explicado lo anterior resta ahora analizar la parte del último concepto de violación en la que el quejoso sostiene que el acto del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado es contrario a la Constitución: --- '... pues al aplicar el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, grava los actos de dicho procedimiento del trabajo y desatiende el principio de supremacía de la Ley Federal del Trabajo, con respecto al ordenamiento estatal que invoca...'. --- Ya en el considerando anterior se explicó que en México existe igual jerarquía entre la legislación federal y la local. En obvio de repeticiones innecesarias debe darse por descontado tal punto y proceder al análisis relativo a si es que existe o no contradicción entre las leyes en cuestión, para que, sólo en el caso de que efectivamente así suceda, se estudie el conflicto competencial inherente que determinará cuál es la norma que debe aplicarse. --- Pues bien, a juicio de este resolutor no existe la pretendida contradicción entre las normas de mérito, dado que no es cierto que la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero grave actos del procedimiento laboral cuya gratuidad está consignada en la Ley Federal del Trabajo. --- Ello es así, ya que lo que la ley reclamada grava no son actos propios del



procedimiento laboral, sino simplemente los servicios públicos registrales que el Estado de Guerrero presta a través de la institución prevista especialmente para ello, y respecto de la cual dicha entidad federal resulta constitucionalmente competente para legislar, por disposición taxativa del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- Es importante diferenciar cuándo se está ante un acto propio del procedimiento laboral, y cuándo ante uno que simplemente se relaciona, de manera indirecta, con aquél. En el primer caso se encuentran comprendidas todas aquellas actividades de naturaleza procesal que son llevadas al cabo, en forma directa e inmediata por las autoridades laborales, que precisamente por no requerir de la concurrencia de persona o entidad extraña al procedimiento laboral, pueden efectuarse sin atender más que a la leyes en materia del trabajo. --

- Por el contrario, existen algunas otras actividades que si bien se relacionan con el procedimiento laboral, no puede considerarse en estricto sentido que formen parte integrante de éste, sino simplemente que su relación es indirecta o mediata, y que por lo tanto no se rigen preponderantemente por la Ley Federal del Trabajo sino por las suyas propias. Tal es el caso del Registro Público de la Propiedad, que no es desde luego una autoridad de naturaleza laboral, ni puede



CORTE DE
LA NACION
DE SALA
DE ACUERDOS.

estrictamente considerarse como una que actué en auxilio de aquéllas, ya que no está contemplada en la fracción III del artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. --- Por ello, al no ser las actividades del Registro Público de la Propiedad parte del procedimiento laboral, sino que su relación con éste se da accidentalmente y sólo de manera indirecta, no existe motivo para aceptar que la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero grave dicho procedimiento, pues lo único que dicho ordenamiento legal en todo caso grava, son los servicios públicos que naturalmente presta, los cuales, ya se ha dicho, son extraños al procedimiento laboral y su relación con éste es sólo ocasional y accesorio. --- Así las cosas, no existe motivo alguno para aceptar que entre una y otra ley existen disposiciones contradictorias, por lo cual resulta innecesario abordar la cuestión relativa al orden jurídico respecto al cual se surte la competencia para legislar en este caso, pues como ya quedó expuesto, sólo sería esto necesario si efectivamente existiera una contradicción, la cual es inexistente. --- Sin perjuicio de lo anterior, este Juzgador estima necesario pronunciarse respecto a la errónea concepción a ultranza del principio de gratuidad del procedimiento del trabajo que el quejoso plasma en sus conceptos de violación, toda vez que éste no debe concebirse en una interpretación amplia e indiscriminada, que

SECRETARÍA DE JUSTICIA



destierre jure et de jure las costas judiciales que son propias de todo juicio, sin importar su naturaleza. --- Piénsese por ejemplo en la institución contenida en el artículo 824, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador cuando éste lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes. Como puede verse, aún en el caso de los servicios periciales que desde luego sí forman parte del procedimiento laboral, se encuentra previsto el pago de honorarios, sin que al respecto pueda alegarse que el procedimiento laboral tiene a fortiori que ser gratuito. Y si en este caso la ley prevé que el costo correspondiente lo absorberá la Junta, ello solamente viene a confirmar que la gratuidad del procedimiento admite, como es natural, determinadas excepciones, máxime si las costas correspondientes se derivan de la utilización de servicios públicos extraños a los que prestan las autoridades del trabajo. --- Por todo lo anterior, no es jurídico aceptar que el Delegado del Registro Público de la Propiedad se hubiere apartado de la Constitución al negarse a inscribir un embargo del que no se le acreditó el pago de los derechos respectivos, ni puede tampoco decirse que con tal proceder hubiere contravenido disposición alguna de la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual,



TE DE
ACION,
SALA
ERDOS,

ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que se impone es también negar el amparo solicitado. --- Conviene finalmente para orientar las consideraciones anteriores, tener en cuenta a través de una interpretación analógica, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que puede consultarse en la página 771 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV-Julio, que a la letra dice: --- 'REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL. CUÁNDO DEBEN EFECTUARSE SIN EL PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. Las anotaciones preventivas a que aluden los artículos 3001 y 3004 del Código Civil para el Estado de Puebla, sólo deben efectuarse sin cobro de derecho alguno en dos casos: el primero, cuando de acuerdo con el artículo 3000 el título presentado sea devuelto sin registrar porque no llene la forma extrínseca exigida por la ley o porque carezca de los datos a que se refiere el artículo 2998; y el segundo, tratándose de los títulos en que se declara, reconozca, adquiere, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos, caso en el cual el propio notario dará los avisos correspondientes y el registrador tiene la obligación de efectuar la anotación o inscripción preventiva a que se ha venido haciendo referencia:



Pero tratándose de los demás documentos y entre ellos desde luego las copias certificadas de embargo, debe decirse que no se encuentran en el primer supuesto y por lo mismo para su inscripción debe observarse lo establecido por el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla, cuyo artículo 24 determina que: 'No se procederá a efectuar inscripción alguna, ni se expedirá certificado de constancias del registro, sin estar debidamente acreditado el pago de los derechos respectivos, si éstos se causaron...'. -- De acuerdo con todo lo antes expuesto, como el marco legal aplicable a las actuaciones del Registro Público de la Propiedad, tratándose del cobro de contribuciones, es la de Ingresos del Estado de Guerrero, el hecho de que el Delegado de dicha institución se hubiere negado a inscribir un embargo porque no se le acreditó el pago de los derechos correspondientes, no es violatorio de garantías individuales ni contraviene la Ley Federal del Trabajo, pues dicho ordenamiento únicamente establece la gratuidad de las actuaciones del procedimiento laboral, pero no las de todas las relaciones jurídicas que indirectamente se le vinculan".



CORTE DE
LA
FEDERACIÓN
E ACUL

CUARTO.- Inconforme con ese fallo, el autorizado del quejoso Sabino Castrejón Marquina, mediante escrito de seis de

junio de dos mil, presentado por conducto del Juzgado que lo emitió, interpuso en su contra recurso de revisión, mismo se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Presidente lo admitió en auto de once de julio de dos mil, el cual se registró bajo amparo en revisión expediente [REDACTED].

QUINTO.- El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción solicitó, en su pedimento II-1112/2000, que se niegue el amparo.

Por acuerdo de Presidencia de veintiuno de agosto de dos mil, el asunto se turnó al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

Previo dictamen del Ministro Ponente, el asunto se radicó en esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, inciso a), de la Ley Orgánica



del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos Segundo y Tercero, fracción I, del Acuerdo Plenario 1/1997; Primero, inciso a) y Segundo del diverso Acuerdo 4/2000, del nueve de marzo de dos mil, toda vez que el presente recurso se interpuso con posterioridad a la vigencia del último Acuerdo citado, en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley local y subsiste en esta instancia la cuestión de constitucionalidad.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión citado, la recurrente hizo valer los siguientes agravios:

"PRIMERO.- Causa agravios al quejoso SABINO CASTREJÓN MARQUINA el contenido del considerando cuarto de la resolución que se combate, en virtud de que su contenido es contrario a lo dispuesto por el artículo 76 bis fracción IV, de la Ley de Amparo. --- En efecto, contrario a lo que establece el Juez de Distrito, en el caso que nos ocupa no se puede dividir la continencia de la causa, esto es, no se puede indicar que el juicio de garantías sea de carácter fiscal y no de carácter laboral, en atención a que si concatenamos el contenido de los artículos 19, 685, 688 y 962 de la Ley Federal del Trabajo, arribaremos a la conclusión de que los actos de

RTE DE
NACION,
SALA
TERCEROS.

autoridad que se reclaman tienen relación directa con el juicio laboral, porque el Registro Público de la Propiedad es una autoridad auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, luego entonces, el juicio de garantías que nos ocupa es de naturaleza laboral y no fiscal, de ahí que de existir materia relativa a suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 bis fracción IV de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tenía el imperativo de suplir la indicada queja deficiente. --- Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el presente recurso de revisión para el efecto de que se determine que el juicio de garantías que nos ocupa es de naturaleza laboral y que para el caso de que exista materia relativa a suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se objetive el imperativo de suplir la indicada queja deficiente a favor del ahora quejoso. --- SEGUNDO.- Causa agravios al quejoso SABINO CASTREJÓN MARQUINA el contenido del considerando cuarto de la resolución que se combate, en virtud de que su contenido es contrario a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 192 y relativos de la Ley de Amparo, ya que contrario a la apreciación del Juez de Distrito, los actos del Congreso del Estado de Guerrero; del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; del Secretario General de Gobierno y; del C.



Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que se les imputan en relación con el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000 y el propio artículo en mención, son violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, son de naturaleza anticonstitucional. --- Esencialmente el Juez Cuarto de Distrito, declara infundado el primer concepto de violación expresado por el quejoso, porque en su concepto el argumento de inconstitucionalidad deviene por el hecho de que Ley de Ingresos se contraponen a la Ley Federal del Trabajo y no a la Constitución. --- Lo anterior es una apreciación errónea del Juez de Distrito, ya que precisamente la Ley de Ingresos resulta inconstitucional porque se encuentra en contravención a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en materia para expedir leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, esto es, si la Ley de Ingreso establece el pago de derechos relacionados con procedimientos derivados de la materia de trabajo que regula el artículo 123 en mención, la norma secundaria denominada Ley de Ingresos invade la esfera de competencia exclusiva del mencionado

TRIBUNAL
CIVIL
DE LA
CIUDAD DE
MEXICO
CORTES DE
LA NACION
A SALA
ACUERDOS

Congreso de la Unión, esto es, la inconstitucionalidad de esta última ley, se objetiva porque su emisión no se encuentra dentro de las facultades de competencia de las autoridades de los Estados, ya que si bien en materia de la expedición de leyes fiscales existe concurrencia entre los Estados y la Federación, dicha concurrencia no debe de rebasar los límites que para tal efecto determina la Constitución, es decir, prevalecerá la concurrencia para emitir leyes fiscales, en tanto, no rebasen las reglas prohibitivas o de exclusividad que la Constitución tenga reservadas a la Federación. --- Desde luego, el hecho de que adicionalmente a que la Ley de Ingresos se encuentre en contradicción con la Ley reglamentaria del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y que exista facultad concurrente de los Estados y la Federación para emitir leyes fiscales, de ninguna manera le otorga la jerarquía de constitucional al primer ordenamiento legal mencionado. --- Por las razones asentadas con anterioridad, se insiste en que el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, literalmente dice: --- 'ARTÍCULO 22.- Los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, causarán derechos conforme a la tasa, tarifas y cuotas siguientes: --- IV.- La inscripción o

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO



reinscripción de todo tipo de embargos incluyendo los laborales y fiscales, así como providencias precautorias, a excepción de la de alimentos y avisos preventivos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 2889 del Código Civil, se causará sobre el monto de los mismos 4 al millar'. -

-- El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, a cuyo texto literal me remito como si lo insertase a la letra, de su contenido se aprecia que atenta en contra de lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atenta también en contra de los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. --- En efecto, el artículo 1º de la Constitución General de la República, establece la garantía fundamental de igualdad, que consiste en el hecho de que, todo individuo gozará de las garantías que dicha Constitución otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, casos y condiciones éstos a que se contrae el artículo 29 de la propia Carta Magna, en el que de manera específica se establecen los casos de excepción en los que pueden suspenderse el disfrute y goce de dichas garantías. --- Los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la Constitución General de la República, establecen



CORTE DE
NACION,
SALA
ACUERDOS.

en forma literal lo siguiente: --- 'Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece'. --- 'Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. --- En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. --- En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho'. --- 'Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. --- No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley



señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. --- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. --- En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. --- Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. - -- En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. --- Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo

OS
LA
A
A

podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. --- En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. --- Las comunicaciones privadas son inviolables: La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Exclusivamente la autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad Federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad Judicial Federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las



comunicaciones del detenido con su defensor. ---

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. ---

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. --- La correspondencia

que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. --- En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.

En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. --- 'Artículo 17.- Ninguna

persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito.

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. --- Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. --- Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil'. --- 'Artículo. 29.- En los casos de invasión perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde'. --- 'Artículo.- 73.- El Congreso tiene facultad: --- X.- Para legislar en toda la

SECRETARÍA



República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123'. --- Los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, señalan: --- 'Artículo 19.- Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno'. --- 'Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. --

- Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley'. --- 'Artículo 962.- Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad'. --- 'Artículo 975.- Exhibido el importe total del precio de la

ATE DE
NACION.
SALA
JUECES.

adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: --- b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales'. --- Por otro lado los artículos 24 y 47, fracciones I, III y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen literalmente que: --- 'ARTÍCULO 24.- El Estado de Guerrero es libre y soberano en su régimen interior y podrá darse las leyes necesarias para su organización y desarrollo, sin contravenir lo estipulado por la Constitución Federal'. --- 'ARTÍCULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado: --- I.- Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; --- III.- Elaborar las leyes locales cuya expedición haga obligatoria la Constitución Federal; --- IV.- Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, señalando las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto;'. --- De los preceptos transcritos con anterioridad, para lo que nos interesa, se desprende que la Legislatura del Estado de Guerrero, se encuentra facultada para legislar o darle vida jurídica a la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000, más no con una facultad omnimoda, sino sujeta a lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73,

56



fracción X, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se debe afirmar que el análisis de la constitucionalidad del artículo 22, fracción IV, debe de hacerse frente a esas normas. --- Al respecto, es necesario precisar que del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, se desprende que los Congresos Locales de acuerdo al contenido de los artículos 73 y 124 del Ordenamiento Supremo indicado, se encuentran autorizados para expedir las leyes de ingresos de las diversas Entidades Federativas, sin embargo, es evidente que sólo pueden expedir dichas leyes de ingresos, siguiendo en lo conducente, las bases que establecen los artículos 1º, 14, 16, 17, 29, 73, fracción IV, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de comprender a otros sujetos o relaciones las mismas incurrirían en inconstitucionalidad. --- Es el caso de que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución General de la República, es facultad reservada al Congreso de la Unión la relativa a legislar en toda la República para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de dicha Constitución y que en acopio a dicha facultad se expidió la Ley Federal del Trabajo, en la que se estableció la gratuidad del procedimiento laboral, el hecho de que se haya legislado en



RTE DE
NACION.
SALA
CUERDOS.

términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, se objetiva una ley y actos de autoridad que invaden la esfera de la autoridad federal, en contravención de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, porque los Congresos de los Estados, sólo pueden legislar en todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión o a cualquiera de sus cámaras, porque es claro que las leyes federales que emanen del Congreso son de jerarquía superior, conforme al artículo 133, a las leyes locales que se dicten por los Congresos Locales, lo que hace lógico que, en caso de contradicción en sus disposiciones, deba prevalecer la dictada con jerarquía federal. Es cierto que conforme a nuestro sistema constitucional, en la forma en que ha sido interpretado por la jurisprudencia y por la doctrina, se debe entender que, en principio, hay concurrencia de facultades impositivas sobre las mismas fuentes, entre la Federación y los Estados. La Federación tiene facultades conforme al artículo 73 de la Constitución Federal para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Y esta facultad, así otorgada en términos generales, no tiene cortapisas con respecto a impuestos directos e indirectos, ni respecto de actos celebrados en los Estados y regidos por sus leyes locales. En cambio, a los Estados sí les está

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO



prohibido expresamente imponer impuestos al comercio exterior y del timbre, así como los demás gravámenes a que se contraen los artículos 117, 118 y 131 de la misma Constitución. Y en cuanto a las fuentes gravables a que se refiere la fracción XXIX del artículo 73, se ha entendido que se trata de impuestos que sólo puede imponer el Congreso de la Unión, pero en los que los Estados tienen derecho a participar en la proporción que dicho Congreso fije. Siendo de notarse que el hecho de que en ese Congreso estén representadas todas las Entidades Federativas puede, teóricamente, nivelar los intereses de la Federación y de los Estados, por lo que si la Federación al expedirse la Ley Federal del Trabajo, determinó la gratuidad de todos los actos relacionados con el procedimiento laboral, no existe ninguna justificación legal para que el Congreso del Estado de Guerrero, haya legislado para gravar en parte dicha actividad jurisdiccional. --- Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el recurso de revisión que nos ocupa y concederse el amparo y protección de la Justicia Federal que reclaman respecto de los actos de autoridad que se refieren en este concepto de violación y se declare la inconstitucionalidad del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000. --- TERCERO.- Causa agravios al quejoso SABINO CASTREJÓN



ORTE DE
NACION
SALA
GUERROS.

MARQUINA, el contenido del considerando Cuarto de la resolución que se combate, en virtud de que su contenido es contrario a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 192 y relativos de la Ley de Amparo, ya que contrario a la apreciación del Juez de Distrito, los actos que se le imputan al Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, consistentes en la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, específicamente su artículo 22, fracción IV; el oficio 88 de 2 de marzo de 2000, mediante el cual declara improcedente la inscripción del embargo relativo al expediente laboral 1088/98 del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; la negativa implícita de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 962 de la Ley Federal del Trabajo, relativa a la inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y; la negativa implícita de otorgar la prelación de derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del día 15 de febrero de 2000, respecto del embargo relativo al expediente laboral número [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, son violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 29 y 73, fracción X, de la

SECRE



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, son de naturaleza anticonstitucional y violan en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad de que es sujeto dicho quejoso, por no encontrarse fundados ni motivados y son contrarios a lo que disponen los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. --- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo, el Registro Público de la Propiedad, es una autoridad auxiliar de las autoridades del trabajo. El artículo 692 (sic) de la Ley Federal del Trabajo, impone a los Presidentes el imperativo de ordenar el registro de los embargos que recaigan sobre inmuebles, es decir, no es la solicitud de instancia de parte interesada la inscripción del embargo, sino que aun cuando no medie la solicitud indicada, se debe de ordenar tal embargo, en atención a que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º de la indicada ley, sus disposiciones son de orden público, lo que quiere decir que la orden de embargo que se realice en materia de trabajo, no es un servicio que le otorga el Registro Público de la Propiedad al trabajador, sino un acto que deviene de la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades del trabajo, mismo que se debe de obsequiar sin condicionamiento alguno de la indicada autoridad auxiliar. --- En efecto, la determinación del Delegado del Registro Público de la Propiedad que

DETERMINACIÓN
DE LA
AUTORIDAD
AUXILIAR.

declara improcedente el registro o inscripción del embargo relativo al expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mismo que fue descrito a plenitud en el rubro de antecedentes de esta demanda de garantías, es contrario a lo dispuesto por los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la gratuidad de todos los actos derivados del procedimiento laboral, pues al aplicar el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2000, grava los actos de dicho procedimiento del trabajo y desatiende el principio de supremacía de Ley Federal del Trabajo, con respecto al ordenamiento estatal que invoca, acarreando como consecuencia y en perjuicio de la parte trabajadora, que no se objetive la prelación derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del 15 de febrero de 2000, en que fue presentado el oficio número 244 de fecha 28 de enero del 2000, el C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19, 685, 962 y 975 de la Ley Federal del Trabajo, solicitó la inscripción del embargo realizado el día 11 de enero de 2000, en el expediente laboral [REDACTED] del índice del Libro de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. --- Congruente con lo

SECRETARÍA DE JUSTICIA



anterior, deberá declararse procedente el recurso de revisión que nos ocupa y concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se inscriba el citado embargo sin el pago de derechos y se estime la prelación de derechos que refieren los artículos 2886 al 2889 del Código Civil del Estado de Guerrero, a partir de las 13:58 horas del 15 de febrero de 2000, en que fue presentado el oficio 244 de 28 de enero de 2000, por el C. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje".

TERCERO.- El primero de los agravios es esencialmente fundado.

En dicho agravio, en síntesis, se argumenta que este asunto es de naturaleza laboral y que por ello cabe suplir la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Previo al estudio del reseñado agravio, para mejor comprensión de la institución jurídica de la suplencia de la queja deficiente, es necesario realizar algunas acotaciones en torno al tema.

La suplencia de la queja deficiente nació directamente en la Constitución Política Mexicana de 1917, en forma súbita e inexplicablemente, sin indicios de su fundamentación histórica o doctrinaria, por lo que preciso es concluir que el Constituyente de CUERDOS.

Querétaro de 1916-1917 es el creador de tal institución jurídica en el juicio de amparo.

Lo anterior se afirma porque la Constitución Política de 1857, las leyes orgánicas del amparo de 1861, 1869 y 1882, así como el Código de Procedimientos Civiles de 1908, no reconocían facultad a favor de los Tribunales Federales para suplir deficiencias que aparecieran en las demandas de amparo presentadas ante ellos, cualquiera que fuese la naturaleza del acto reclamado en la queja respectiva; de igual forma, la Exposición de Motivos con la cual Don Venustiano Carranza acompañó a los Constituyentes el proyecto de Constitución, no menciona tal institución; tampoco al discutirse en el seno del Constituyente el artículo 107, existe mención o inferencia de especie alguna de los antecedentes de la Institución en comento; por último en la doctrina no se ha encontrado texto legal, nacional o extranjero, que en forma directa la anteceda o analice los principios jurídicos previos que la fundamenten.

El texto original del párrafo segundo del artículo 107 constitucional, en que se plasmó la naciente institución jurídica, era del tenor literal siguiente:

“ART. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes: --- I.-... --- II.- En los juicios civiles y penales, salvo los casos de la



regla IX, el amparo sólo precederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda por vía de agravio. --- La Suprema Corte no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación. --- ..."

El precepto constitucional transcrito muestra que la suplencia de la queja en el juicio de amparo sólo se permitía cuando el acto reclamado derivaba de un juicio penal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación advertía que en dicho juicio se había cometido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo había dejado sin defensa o que se había juzgado al quejoso por una ley que no era exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza no se había combatido debidamente la violación.

LA
NACION;
SALA
ACUERDOS.

Del examen en torno al primitivo precepto constitucional transcrito, se arriba a la conclusión de que las razones justificativas que originaron la suplencia de la queja deficiente, omitidas en la Exposición de Motivos y en la discusión del proyecto de Constitución, son: a) La protección de intereses fundamentales, es decir, aquellos consagrados por la Constitución y por las leyes que de ella emanen (los derechos fundamentales que pueden controvertirse en el juicio de amparo en materia penal, principalmente son la vida y la libertad); b) La búsqueda de la verdad real o material, por lo que la institución jurídica de mérito constituye una excepción al rigorismo jurídico del formalismo legal que rige en los juicios civiles; y c) el equilibrio procesal entre las partes contendientes en el juicio de amparo.

Asimismo, cabe distinguir la suplencia de la queja deficiente, de la suplencia del error, con la cual frecuentemente se le confunde.

Al respecto, establece que la suplencia del error o ignorancia de la parte quejosa al citar equivocadamente el precepto constitucional que contiene el derecho fundamental que se estima transgredido por el acto señalado como reclamado, consiste en otorgar el amparo por la garantía que realmente aparezca violada, pero sin que el Órgano de control constitucional esté facultado para suplir el hecho, el derecho, ni mucho menos el escrito de queja.



Sin embargo, si dentro del concepto de la queja deficiente se incluye la posibilidad de suplir el error en la cita del precepto que contiene la garantía que se estima violada, evidentemente la suplencia del error viene a ser una especie del género suplencia de la queja deficiente. El error en la cita de una garantía supone una inexactitud en el concepto de violación o agravio, que consiste en equivocarse en la cita de la norma constitucional o secundaria que se estima vulnerada, pero la violación o agravio contenido en el acto reclamado se relacionan íntimamente con la garantía constitucional que la establece y el error consiste en equivocarse en la cita. Por ello, el error es intrascendente y no hay objeción en suplir el error al fallarse, ya que no representa ninguna desigualdad entre las partes.

No sucede lo mismo con la queja deficiente, cuando el concepto de violación o agravio está totalmente omitido o imperfectamente desarrollado; o la cita del precepto constitucional o secundario que contiene la garantía violada puede faltar totalmente. La suplencia de la queja deficiente tiene por finalidad reconstruir total o parcialmente el concepto de violación o agravio que no aparece en la demanda o recurso.

En resumen, la suplencia del error se debe a una imperfección de estilo; la suplencia de la queja deficiente a una imperfección de fondo. En la primera existe concepto de violación o agravio, en la segunda falta total o parcialmente y siempre constituye una omisión.

TE DE
NACION.
SALA
CUERDOS.

La figura jurídica de la suplencia del error está contemplado en el vigente artículo 79 de la Ley de Amparo, cuando dispone:

"Art. 79.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda"

Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J.49/96, publicada en el Semanario de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Agosto de 1996, página 58 (registro 200066), que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo



ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto."

Asimismo, la suplencia de la queja deficiente puede extenderse para suplir la "defensa deficiente", ya que el primitivo precepto constitucional, al referirse a las violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado al reo sin defensa, facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para examinar tales violaciones cometidas en actos previos a la interposición de la demanda de amparo, es decir, ocurridos durante la secuencia del procedimiento penal y que por torpeza no se hubiera alegado dicha violación procesal.

ORDEN DE
LA
B
LA

Con base en las anteriores premisas, se puede definir la suplencia de la queja deficiente como:

La institución procesal constitucional, de carácter proteccionista y antiformalista, de aplicación discrecional, que integra las omisiones -parciales o totales-, de la demanda de amparo o del recurso siempre a favor nunca en perjuicio del quejoso o recurrente, con las limitaciones y bajo los requisitos señalados por las disposiciones constitucionales y reglamentarias conducentes.

El carácter proteccionista y antiformalista de la multirreferida institución se respetó al reformarse el artículo 107 constitucional, mediante Decreto de 30 de noviembre de 1950, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de febrero de 1951. Los párrafos segundo y tercero de la fracción II del antedicho artículo, que se refieren a la suplencia de la queja, quedaron redactados en los términos siguientes:

"Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. --- Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y en la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además,

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA



cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso."

La Exposición de Motivos con la cual acompañó el Presidente de la República el texto de las reformas constitucionales, hace referencia a las modificaciones en relación a la suplencia de la queja, mediante los siguientes conceptos:

"La deficiencia de la queja, según las vigentes normas constitucionales, sólo puede suplirse en amparos penales directos." --- 'Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas, a fin de que se supla la deficiencia de la queja, cualquiera que sea el amparo de que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ello es así, porque si ya el Alto Tribunal declaró que una ley es inconstitucional, sería impropio que por una mala técnica en la formación de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violación a la Constitución.' --

- 'Y en materia penal, restringida hasta ahora la deficiencia de la queja a los amparos directos, se ha extendido a los indirectos, acogiéndose a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia. Y también podrá suplirse esta deficiencia en amparos de trabajo, directos e indirectos, porque las normas constitucionales contenidas en



ORTE DE
NACION,
SALA
ACUERDOS.

el artículo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y esta clase muchas veces no está en la posibilidad de defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigorismos técnicos."

Del texto del artículo constitucional reformado, así como de la Exposición de Motivos, antes transcritos, se aprecia que se amplía la institución: a) Para hacer aplicada discrecionalmente por los Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia y no exclusivamente por ésta última, como sucedía antes de la citada reforma; b) Para aplicarse en el amparo en materia laboral; y c) Para autorizar su aplicación en toda clase de juicios de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La suplencia de la queja en materia de trabajo, de acuerdo con la Exposición de Motivos que precedió a la reforma constitucional apuntada, el Presidente de la República la sustentó en el hecho de **"que las normas constitucionales contenidas en el artículo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora"** y agrega: **"... esta clase (la trabajadora) muchas veces no está en posibilidad de defender adecuadamente tales derechos por ignorancia de rigorismos técnicos."**

Como se ve, al motivarse la suplencia en materia de trabajo, se observaron los mismos principios que rigen la suplencia en el



amparo penal, ya que aquélla resulta "proteccionista" de la clase obrera, considerada en el juicio de amparo, la parte débil – económica y culturalmente– y en el mismo amparo subsiste el principio de estricto derecho que rige para la queja de la contraparte del trabajador quejoso, a quien se considera ampliamente capacitado para obtener una defensa adecuada de sus intereses; es "antiformalista" respecto a la técnica del juicio de garantías; asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo constitucional reformado, la suplencia en materia de trabajo sólo procedía por violaciones manifiestas de la ley, que dejaran a la parte obrera sin defensa; por último, la finalidad de la suplencia en el amparo laboral es tutelar de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 constitucional y en las leyes ordinarias del indicado precepto constitucional.

La suplencia de la queja en materia de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es igualmente proteccionista, si bien con un matiz diverso – no individual sino social – ya que tiene como finalidad proteger no a la parte débil en el juicio de amparo, sino al orden jurídico supremo plasmado en la Constitución Federal que, por mandato expreso y categórico de su artículo 133, no puede ser contrariado por ninguna ley secundaria.

Mediante Decreto de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de abril del mismo año, se reformó la fracción II, párrafo segundo, del artículo 107 constitucional. Por diverso Decreto

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se creó el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Los mencionados preceptos, constitucional y reglamentario, regulan el principio de la suplencia de la queja deficiente, en los términos siguientes:

"Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. --- En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución..."

"Art. 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: --- I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. --- II.- En materia penal,

SE SUPLENIRÁ CC
JUSTICIA DE LA
SECCIÓN D A
SECRETARÍA DE



la suplencia operará aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. --- III.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley. --- IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará a favor del trabajador. --- V.- A favor de los menores de edad o incapaces. --- VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa."

Las Exposiciones de Motivos relacionadas con las iniciativas de reforma y adición de los preceptos constitucional y reglamentario antes transcritos, así como el Dictamen formulado por la Comisión de la Cámara de Diputados, el veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y seis, marcan los fundamentos o principios rectores de la suplencia de la queja deficiente en la legislación vigente, que a continuación se precisan:

Iniciativa de reforma del precepto constitucional indicado.

"Los señores que suscribimos, con fundamento en lo previsto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto, hemos creído pertinente proponer reformas y adiciones a los artículos 106 y 107,

ORTE DE
NACION.
SALA
ACUERDOS.

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr mejoras sustanciales en la administración de justicia federal, persiguiendo siempre el ideal de que ésta sea adecuada, pronta y expedita... Mediante la reforma que se propone a la fracción II del artículo 107 constitucional, se pretende adecuar el juicio de amparo a las exigencias de la época actual para que continúe garantizando la efectividad del Estado de Derecho. Se propugna por suprimir tecnicismos de obstaculicen la impartición de la Justicia, dándole mayor amplitud a la institución de la suplencia de la queja deficiente.

Así, se establece la regla genérica de la suplencia obligatoria de la deficiencia de la queja, reservando a la Ley de Amparo (Artículo 76 bis, 91 y 227) su reglamentación. Ello tiene como finalidad dar una mayor amplitud a esa institución, lo que necesariamente redundará en beneficio del gobernado al evitarse los excesos a que conducen los rigorismos formalistas, es decir, se impedirá la denegación de Justicia por razones de carácter meramente; técnico por otra parte, se pretende establecer constitucionalmente la obligación de recabar, de oficio, pruebas que beneficien a los poblados ejidales o comunales, o a los ejidatarios o comuneros y eliminar el escollo que, conforme al sentido gramatical del texto vigente, impide de



modo general, que en los juicios de amparo en materia agraria operen la caducidad de la instancia y el sobreseimiento por inactividad procesal, no obstante que tales instituciones jurídicas pueden darse en beneficio de las entidades o individuos mencionados. Por último, se limita a los juicios en que se reclamen actos que afecten derechos colectivos, la inoperancia del desistimiento y del consentimiento expreso de los actos reclamados, excepto si el primero es acordado por la asamblea general o el segundo emana de ésta. De esta manera, se abre la posibilidad de que los núcleos de población logren arreglos que les beneficien cuando estos se condicionen a que se produzcan el desistimiento o el consentimiento mencionados."

En la iniciativa que adicionó el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se aduce:

"La necesaria actualización de la legislación con los requerimientos que la rápida evolución de la vida moderna trae consigo, hace indispensable la revisión constante de las normas de nuestro ordenamiento jurídico.



FORO DE
LA N
A
E ACU

Por ello, en diversa iniciativa que en este período de sesiones se ha presentado a esta Honorable Cámara de Senadores, se propone, entre otras, la

reforma de la fracción II del Artículo 107 de la Constitución General de la República para establecer, con rango constitucional, la suplencia obligatoria de la deficiencia de la queja, reservando a la legislación secundaria su reglamentación.

Como consecuencia de lo anterior, en esta iniciativa se suprime del artículo 76 de la Ley de Amparo sus cuatro últimos párrafos, que se refieren a la suplencia de la queja y se crea el Artículo 76 bis para consignar en él las hipótesis de la referida suplencia obligatoria de la queja deficiente. En materia penal, el deber de suplir deficiencias en beneficio del reo tendrá lugar aún en el caso de falta de conceptos de violación o de agravios, en virtud de que la vida y la libertad son valores fundamentales que deben ser objeto de esmerada protección.”

En el Dictamen relativo al estudio de las anteriores Iniciativas, formulado por la Cámara de Diputados, se manifiesta:

“La Comisión que suscribe, previo examen de las normas vigentes de la Ley de Amparo, su confrontación con la normas contenidas en la iniciativa, verificando su congruencia con las reformas aprobadas en el período de sesiones anterior al artículo 107 de la Constitución, así como de la reflexión en cuanto al posible impacto y

SUPLENTE
JURADO
S. J.



trascendencia de las normas propuestas, emite el siguiente dictamen.

En primer lugar, la comisión que suscribe reconoce que una de las funciones primordiales de todo Estado democrático es la impartición de justicia, tarea que el Estado mexicano ha contemplado desde su nacimiento como nación independiente.

En nuestro sistema el Poder Judicial de la Federación es guardián de la Constitución Federal, a él compete vigilar que los actos de autoridad se ajusten a los mandamientos fundamentales, cumpliendo de esta manera no sólo con lo preceptuado por el artículo VII constitucional, sino con la delicada labor de preservar inviolable nuestro máximo ordenamiento jurídico.

La tutela jurisdiccional de la Constitución, encuentra su base en la aplicación de cuerpos jurídicos, sustantivos y adjetivos. Uno de éstos es la Ley de Amparo cuya reforma se estudia. El derecho caracterizado por su dinamismo, exige que sus disposiciones se amolden a las exigencias del contexto social para mantenerse como un instrumento útil y fortalecer del cambio estructural.

Conforme a este criterio de revisión permanente y en acatamiento del postulado político de 'Justicia

4
12
12
12
ACU

Igualitaria', el gobierno mexicano atiende uno de los requerimientos ingentes de la vida nacional. El Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, ha reiterado que la justicia igualitaria 'es presupuesto ineludible del orden y de seguridad jurídica, equivale a poner al alcance de todos los integrantes de la comunidad los tribunales y las instituciones encargadas de dirimir controversias, para los efectos de satisfacer el anhelo de vivir en un medio en que se respeten los derechos subjetivos, la integridad física y los bienes de las personas'.

Por lo anterior, la comisión que suscribe, considera que 'La Iniciativa de Reformas a la Ley de Amparo', entraña de vital importancia (sic) puesto que tiende a mejorar diversos aspectos del juicio de garantías y del adecuado cumplimiento de la garantía constitucional que proclama la impartición de justicia más ágil, pronta y eficaz.

La reforma en examen, propone la reforma, adición o derogación según cada caso, de veintiocho artículos de la Ley de Amparo en vigor. En el conjunto de artículos proyectados encontramos reformas de gran trascendencia, de mejoría técnica de diversos preceptos, incluso aspectos novedosos que pretenden auspiciar la celeridad del procedimiento, en tanto que otros tienen como

102
SE
SECRETARIA DE



finalidad brindar mayor seguridad a su secuela procedimental.

Sin lugar a dudas, la aportación más valiosa de la propuesta senatorial es el establecimiento y definición del principio de la suplencia de la queja, ello con carácter obligatorio. En materia de amparo ha regido el principio de ser de estricto derecho, principio que consiste en que en el estudio que abordan sobre la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, el juzgador sólo debe analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda, sin entrar en consideraciones acerca de la inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se incluyan en dichos conceptos, impidiendo así, que el juez supla las deficiencias que pudiera presentar la demanda respectiva.

Esta situación acarrea como consecuencia que en un gran número de casos sea un formulismo antisocial y anacrótico (sic), victimario de la justicia, por lo que se justifica plenamente la existencia de la suplencia de la queja, es decir, que el juzgador esté facultado para no ceñirse ni limitarse a los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, sino que deba hacer valer, oficiosamente, en ciertos amparos, vicios y violaciones inconstitucionales de los actos reclamados.

4
EJECUTIVO

Una demanda de amparo, o un recurso de revisión, pueden ser deficientes por omisión o imperfección, en donde se infiere que suplir las deficiencias de la queja, significa llenar las omisiones en que hayan incurrido la demanda o el recurso.

La iniciativa que ahora se dictamina, propone el establecimiento de la suplencia de la queja, ello con carácter obligatorio, lo que trae consigo una mayor protección de los quejosos y recurrentes, y convierte en un instrumento más eficaz al juicio de amparo, ajustándose éste a la casuística señalada en el nuevo artículo 76 Bis, la que consideramos adecuada por el notorio beneficio en favor de determinados sectores de quejosos y recurrentes. Además, el motivo por el cual se establece la suplencia de la queja deficiente, responde a la idea de hacer efectiva la supremacía constitucional encomendada a la labor del Poder Judicial de la Federación.

Es de destacarse, que se conserva el actual primer párrafo del artículo 76, en la iniciativa se mantiene como única disposición del precepto, y contiene la clásica 'Formula Otero', o sea, el principio de la relatividad de las sentencias de amparo; sin que la referida suplencia de la queja, materia del artículo 76 Bis, derogue o afecte aquel principio, ya secular

SECRETARÍA DE



Igualmente la reforma es positiva en cuanto a su extensión, ya que la obligatoriedad de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el artículo 76 Bis, abarca no sólo los conceptos de violación de las demandas, sino también la deficiencia de los agravios, al examinarse los recursos de revisión de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito.

La comisión que suscribe, estima conveniente recordar que la evolución legislativa que ha seguido la suplencia de la queja en los juicios de amparo; institución que en el texto original de la Carta Magna de Querétaro, solamente existía en materia penal, para los casos de violación manifiesta de la Ley, en los que el quejoso había quedado sin defensa, o había sido juzgado por una ley no exactamente aplicable, y que sólo por torpeza inexcusable no era combatida debidamente esa violación.

El párrafo segundo de la fracción II del artículo 107 Constitucional, ha sido adicionado por sucesivas reformas, y así, en la publicada en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1951, se incluyó la suplencia de la queja, en forma facultativa, para los amparos interpuestos en contra de actos fundados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así

ORTE DE
LA NACIÓN
A SALA
ACUERDOS.

como la deficiencia de la queja de la parte obrera en materia de trabajo.

En el Diario Oficial de dos de noviembre de 1962, se publicó una importante adición a los principios reguladores del juicio de amparo, consistente en ordenar, y no sólo autorizar, la suplencia de la queja en los juicios constitucionales en materia agraria, y ello de acuerdo con lo que dispusiera la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, así como que en ningún caso procederían en esa materia la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal.

En virtud de la reforma publicada el 20 de marzo de 1974, se autorizó la suplencia de la deficiencia de la queja en los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ello también de conformidad con lo que dispusiese la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional.

Ahora bien, en la misma fecha de la Iniciativa de ley que ahora se dictamina, o sea el 15 de noviembre último, varios senadores presentaron una iniciativa, de reforma constitucional, consistente en modificar la fracción II del artículo 107 de la Carta Magna, en el sentido de referir genéricamente los casos de la suplencia de la queja, a las



disposiciones de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, a efecto de facilitar y ampliar los beneficios de aquella institución, de acuerdo con las necesidades impuestas por el cambio social. Dicha Iniciativa mereció la aprobación de ambas Cámaras y del Constituyente permanente. Se publicó en el Diario Oficial de fecha siete de abril en curso. Hoy resulta pertinente aplicar la regla superior contenida en la nueva fracción II del artículo 107 Constitucional, señalando los diversos casos de la suplencia de la queja comprendidos dentro del texto vigente de la Ley de Amparo, de conformidad con las necesidades manifestadas por la evolución social y jurídica de nuestra sociedad política, uniformando los términos legales de la suplencia de la queja y haciendo ésta obligatoria para todos los casos recogidos con anterioridad, y extendiendo la suplencia a los agravios de los recursos de revisión en los amparos biinstanciales, ya que tienen igual importancia jurídica la demanda inicial y los recursos contra las sentencias de los Jueces de Distrito.

En el Derecho Social Mexicano se concede un tratamiento especial a las clases económicamente débiles, tal es el caso de los ejidatarios, comuneros, trabajadores, menores de edad, incapaces y también personas acusadas por delitos, por lo que las Comisiones Dictaminadoras



OFICIO
A. P.
A. I.
ACU.

estimaron correcto que no se otorgue condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial a quienes realmente son desiguales; partir del supuesto de igualdad jurídica entre quienes no la tienen en realidad, conduciría fatalmente a hacer nugatoria la impartición de justicia pues tratar igual a desiguales es absolutamente injusto.

Esta Comisión, aprecia que la iniciativa de reformas pretende ampliar la suplencia obligatoria en la queja deficiente a todas las ramas del Derecho, es indudable la bondad intrínseca de esta idea, pero es necesario reconocer que el grado de desarrollo de nuestro Derecho positivo no permite llegar aún a este desideratum; no es momento aún de dar igual trato a quienes poseen recursos suficientes para defenderse por sí mismos, o pueden contratar la mejor defensa, que a quienes por su falta de preparación o por su carencia de recursos económicos, no pueden autodefenderse, ni pagar una defensa adecuada.

Por ello reconociendo el alto valor que tiene el pretender lograr la jurisdicción plena en toda clase de asuntos para los miembros del Poder Judicial Federal, estamos convencidos de lo valioso que es conservar también la vocación protectora de las normas del Derecho Social. En tal virtud estima oportuna la enmienda senatorial al artículo 76 bis

RECEIVED
SECRETARIA DE JUSTICIA
3 E O 10 1
SECRETARIA DE

A

respondeen
materia de s

der
Co

ORTE DE
INDELA
SALA
ACUERDO.

faculta al legislador ordinario para que la reglamente, evitando así las constantes reformas constitucionales.

b) Persiste el carácter proteccionista a favor de la parte débil y antiformalista o de ausencia de rigorismos técnicos, en cuanto a su aplicación en el juicio de amparo.

c) De acuerdo con la evolución legislativa, la aplicación de la referida institución se amplía a todas las materias del juicio de amparo, con los alcances jurídicos y particularidades fijados en las diversas adiciones a la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno; dos de noviembre de mil novecientos sesenta y dos; veinte de marzo de mil novecientos setenta y cuatro; y veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

d) En la última adición citada, se creó el artículo 76 bis, de la Ley de Amparo en que se regula la aplicación de la Institución jurídica en las distintas materias del juicio de amparo, tanto en la demanda como en los recursos.

A fin de resolver este asunto, conviene acotar todavía más lo relativo a la suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia de trabajo, que se caracteriza porque:

1) Se aplica para proteger los intereses fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanan, en favor del trabajador quejoso que



que son de índole económico, no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hace posible conservar la vida y vivir con libertad.

2) Su aplicación es amplia o total, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice:

"Art. 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I... II... III... IV.- En materia laboral, sólo se aplicará a favor del trabajador..."

Del análisis de la norma transcrita se advierte que el legislador facultó al Órgano de amparo, para que aplique dicha institución exclusivamente en favor del trabajador quejoso en el trámite de las demandas de amparo directo e indirecto, así como en los recursos que prevé la Ley de Amparo, para complementar y mejorar los conceptos de violación o los agravios, o bien, para examinar violaciones que acusen el o los actos reclamados, aún ante la ausencia total de concepto de violación o agravio. Así lo ha sustentado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 39/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, que dice:

LA NACIÓN,
A...

♦ E ACU...

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AÚN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA', establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para aplicar al amparo promovido por el trabajador, el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer



principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aún ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

3) Para determinar cuándo el juicio de amparo pertenece a la materia de trabajo, principalmente debe atenderse a los aspectos siguientes:

3.a) Como la suplencia de la queja está basada en el principio de la justicia distributiva, que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, se instituyó a favor de sujetos específicos considerados la parte débil en el juicio de amparo, para lograr el equilibrio procesal en el mismo, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la

administración de justicia, para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En el caso concreto del amparo en materia de trabajo, por disposición expresa del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente se aplica en favor del trabajador, por lo cual el sujeto promovente del juicio de amparo, o inconforme en el recurso deberá tener esa calidad.

3.b) La naturaleza jurídica del acto reclamado que define la materia del amparo, se determina por el bien jurídico o interés fundamental controvertido en el amparo, esto es, en el juicio de amparo en materia de trabajo el acto reclamado afecta de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el apartado A), del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos.

Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, determinan el tipo del juicio de amparo en esta materia (de trabajo), sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por la legislación laboral constitucional u ordinaria antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquellos derechos fundamentales para que surja la obligación del Órgano de Control Constitucional de aplicar la institución de mérito a favor de éste. A dicha conclusión se llega empleando las



mentales reglas de la lógica jurídica, pues la contraparte del trabajador quejoso en el juicio de amparo lo es la autoridad responsable y la teleología de la citada suplencia es lograr que dicho trabajador tenga la misma oportunidad de defensa en la hipótesis en que el amparo lo hubiera promovido el patrón, quien cuenta con los recursos económicos suficientes para su asesoramiento jurídico en el combate del acto reclamado. Tal sentido es acorde a los criterios sustentados por la Tercera Sala y el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, en su anterior integración, en las tesis aisladas 3ª. XLIV/93 y P.XXXII/90, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomos XII, Septiembre de 1993 y V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, páginas 35 y 52, la segunda aplicada en sentido contrario, que esta Sala comparte y que respectivamente dicen:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA UN PRECEPTO DE NATURALEZA LABORAL, CONTENIDO EN UN REGLAMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CUANDO SU APLICACIÓN AFECTA A LOS TRABAJADORES. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo que previene como regla general la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios como una obligación de las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, previene en su fracción IV, que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador, debiendo inferirse que resulta aplicable ese dispositivo cuando una disposición de un reglamento administrativo, como

ACUERDO

es el artículo 16 del decreto de creación del 'Servicio Postal Mexicano', afecta a los trabajadores de ese organismo al establecer que en sus relaciones estarán sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puesto que si bien se trata de un amparo que genéricamente podría catalogarse como un amparo contra leyes, al reclamarse un acto que materialmente tiene esa naturaleza, sin embargo por su contenido es de carácter laboral, dándose por consiguiente la misma razón para suplir la deficiencia de la queja que consideró el legislador al establecer en la fracción IV del artículo 76 bis mencionado."

"SUPLENCIA DE LA QUEJA. EN AMPARO CONTRA LEYES NO DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA, NO PROCEDE EN BENEFICIO DEL QUEJOSO NO TRABAJADOR CUANDO LOS TERCEROS PERJUDICADOS SON TRABAJADORES. Cuando en el juicio de amparo contra leyes no declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, y los terceros perjudicados tienen carácter de trabajadores, no opera en favor del quejoso no trabajador la suplencia de los conceptos de violación o de agravios deficientes, ya que tal proceder sería contrario a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, los planteamientos contra la



sentencia o la ley, en estos casos, deben examinarse en estricto derecho."

Pues bien, con apoyo en las anteriores acotaciones, se procede al examen del agravio en cuestión, en que medularmente se alega que este amparo corresponde a la materia de trabajo y que por ello el Órgano de Amparo está obligado a suplir la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Como se precisó al inicio de este considerando, esta Sala estima sustancialmente fundado el reseñado agravio. Para demostrar por qué se considera que este asunto se trata de un amparo en materia de trabajo y no simplemente de un amparo contra leyes o en materia constitucional, como erróneamente se clasificó en el fallo recurrido, es necesario determinar la calidad del quejoso, así como la naturaleza de los actos reclamados.

Al respecto, de las constancias que corren agregadas al expediente correspondiente a este juicio de garantías, consistentes en la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la Delegada Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero y la copia certificada del oficio 88 de dos de marzo de dos mil, que se refiere al acto concreto de aplicación de la ley reclamada, esto es, el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal del Año 2000 (páginas 1 a 13, 29 a 30 y 33), se desprende que el presente juicio de amparo se promovió por Sabino Castrejón

ORTE DE
A B

A

ACU

Marquina, por su propio derecho, en su calidad de trabajador, ya que la inscripción del bien embargado se ordenó en el juicio laboral [REDACTED] en el cual dicho quejoso actuó como parte actora en contra de la empresa [REDACTED] y Otros. Luego, el citado embargo no proviene de un juicio civil o mercantil, ni se originó con motivo de la celebración de un acto, contrato o convenio privado. Por lo mismo, es claro que la calidad de trabajador con la cual Castrejón Marquina intervino en el juicio laboral, en que se ordenó la inscripción del bien embargado, la conservó al promover la demanda de amparo, en que se combate el acto concreto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional que sirvió de fundamento para negar la procedencia del citado embargo. La calidad de trabajador del susodicho quejoso también se reconoció en el propio fallo recurrido, al señalar:

“...En el caso que nos ocupa, sí bien es cierto que el quejoso es un trabajador y que con motivo de un juicio laboral se debió inscribir un embargo en el Registro Público de la Propiedad...”

Sin embargo, no es acertada la consideración que le sigue a tal reconocimiento, en el sentido de que la posición que guarda el trabajador frente a las autoridades responsables legislativa y administrativa que emitió y aplicó la ley reclamada, respectivamente, no es distinta a la de cualquier otro gobernado, es decir, que el hecho de que el promovente de este juicio de amparo sea un trabajador no lo coloca en una situación de desigualdad que requiera ser equilibrada, pues frente a él no



ne a un patrón o a una autoridad de trabajo, sino a dichas autoridades administrativa y legislativa.

La reseñada consideración no es acertada porque, atendiendo a la teleología del sistema de garantías sociales consagradas en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes ordinarias de naturaleza laboral que de ella emanan, en congruencia con la teleología de la suplencia de la queja deficiente, aquélla de lograr el equilibrio entre individuos que pertenecen a clases socioeconómicas distintas, como son los obreros y los patrones, representados por el trabajo y el capital, respectivamente, ésta de equilibrar procesalmente a las partes en el juicio de amparo, con el propósito directo e inmediato de proteger el interés fundamental que fluye en ese sistema de garantías sociales, cuando son vulneradas, transgredidas, limitadas, desconocidas o de cualquier forma, afectadas por el acto de la autoridad responsable, la cual, sin importar la función que desempeña (administrativa, legislativa o jurisdiccional), constituye la contraparte natural del trabajador quejoso en el amparo en materia de trabajo, quien se encuentra en desventaja procesal frente a dicha autoridad, para ejercer su autodefensa o pagar el asesoramiento profesional calificado, dados sus precarios recursos económicos y culturales, por lo que nace la obligación del Órgano de Control Constitucional de suplir la queja deficiente para resarcir los conceptos de violación o los agravios, o bien, para analizar violaciones que no se hubieran alegado en los mismos.

Por otra parte, en relación con la naturaleza jurídica del acto reclamado, también se apreció equivocadamente en la sentencia recurrida, al catalogar este asunto como un amparo contra leyes o en materia constitucional, porque se reclamó la inconstitucionalidad de una ley fiscal y su acto concreto de aplicación, lo realizó por una autoridad administrativa.

Las circunstancias accidentales de que en el presente juicio de amparo el trabajador quejoso no tenga como contraparte al patrón o a una autoridad del trabajo, sino a autoridades de índole legislativa y administrativa; y de que el acto reclamado no se derive de un conflicto obrero-patronal, sino de una norma legal y de su acto concreto de aplicación, realizado por una autoridad administrativa, no son causas determinantes de la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, de la materia del amparo, pues como quedó acotado anteriormente, la materia o naturaleza del amparo la determinan la calidad del sujeto que lo promueve, así como la naturaleza jurídica del acto, ley o reglamento reclamado, que a su vez se fija por el bien jurídico o interés fundamental que afecta o lesiona. En el caso del amparo en materia de trabajo, el promovente debe tener la calidad de trabajador y el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún bien jurídico o interés fundamental, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Federal o en las leyes ordinarias de naturaleza laboral que de ella emanen, a favor del trabajador quejoso, aspectos que se omitieron analizar en el fallo recurrido, por lo que es necesario hacerlo en esta instancia. Ya se analizó anteriormente por qué el promovente del presente juicio de amparo, aquí recurrente, tiene la calidad de trabajador,

SECRETARÍA DE JUSTICIA



pero resta precisar cuál es el bien jurídico o interés fundamental afectado por la ley reclamada y por su acto concreto de aplicación, es decir, fijar la naturaleza jurídica de los actos reclamados.

Al respecto, de la demanda de garantías se aprecia que se reclamó el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, que dispone:

"ARTÍCULO 22.- Los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, ~~causarán~~ derechos conforme a la tasa, tarifas y cuotas siguientes: --- I... II... III... IV.- La inscripción o la reinscripción de todo tipo de embargos incluyendo los laborales y fiscales, así como providencias precautorias, a excepción de la de alimentos y avisos preventivos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 2889 del Código Civil, se causará sobre el monto de los mismos 4 al millar".

Asimismo, se reclamó el acto concreto de aplicación de la norma legal transcrita anteriormente, contenido en el oficio 88 de dos de marzo del dos mil, suscrito por la autoridad responsable Delegada Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, que en la parte conducente

COPIA DE
LA...
A...

E ACUERDO...

"LABORAL [REDACTED] --- EL QUE SE INDICA. ---
 Acapulco, Gro., a 2 de Marzo del 2000 --- C.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. --- C I U D A D . ---
 En atención a su oficio No. 244 de fecha 28 de
 enero del año en curso, mediante el cual remite
 esta Delegación para su inscripción copia
 certificada del acta de embargo deducido del Juicio
 al rubro citado promovido por SABINO
CASTREJÓN MARQUINA en contra de [REDACTED]
[REDACTED] Y OTROS, al respecto y por medio
del presente me permito informarle que no procede
lo solicitado, toda vez que para dar cumplimiento a
lo solicitado, deberá acreditar con el Recibo Oficial
haber realizado el pago por concepto de derechos
de Registro Público de la Propiedad. --- Con
fundamento en el art. 22 fracción IV de la Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado."

Ahora bien, del análisis de los actos reclamados antes
 precisados, se aprecia que la ley se tilda de inconstitucional
 porque grava, por concepto de Derechos de Registro Público de
 la Propiedad, la inscripción o reinscripción de los embargos
 laborales, que se causará sobre el monto de los mismos 4 al
 millar; mientras que a través del acto concreto de aplicación de la
 citada norma legal, se negó la inscripción del embargo de un
 inmueble, a favor del quejoso, ordenado en el conflicto laboral
 [REDACTED] intentado por dicho quejoso en su carácter de parte



...ora, en contra de la persona moral [REDACTED]
[REDACTED] y Otros.

Los artículos 17, 73, fracción X y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 19, 685, 962 y 975, fracción II, inciso B), de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa disponen:

Constitución Federal.

"Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."

Art. 73. E) Congreso tiene facultad: I... X.- y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. --- El Congreso

REVISIÓN

RTE DE
NA
S
CUERPO

de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: --- A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: --- I... XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno."

Ley Federal de Trabajo.

"Artículo 19.- Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno."

Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será ... gratuito...

Artículo 962.- Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 975.- Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: --- I... II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: --- a)...



b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales."

El análisis sistemático de las normas constitucionales y ordinarias transcritas permite establecer que el Estado, a través de sus diversos órganos o dependencias, ya sean federales, locales, municipales o el Distrito Federal, actuando directamente en su función jurisdiccional formal o material, o bien, como auxiliares, están obligadas a prestar el servicio público de la administración de justicia en materia de trabajo, de manera gratuita, en cualquier acto o actuación relacionada con la aplicación de las normas de trabajo, esto es, sin gravar el acto o actuación con ninguna especie de contribución. Bajo esta tesitura, si la adjudicación de bienes inmuebles embargados en un juicio laboral, en favor del trabajador, es gratuita, por disposición expresa de los artículos 19 y 975 de la Ley Laboral, que lo eximen de pagar gravamen, impuestos y derechos fiscales, lo que conlleva la gratuidad de la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del inmueble adjudicado al trabajador, con mayor razón lo será la inscripción del embargo correspondiente, puesto que la orden de inscripción del mismo, también emana de una norma legal de trabajo (artículo 962).

Como se ve, atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados (ley y acto concreto de aplicación) que constituye uno de los elementos para determinar la materia del juicio de amparo, corresponde clasificarlos dentro de la materia de trabajo, porque afectan un bien jurídico o interés fundamental, consagrado a favor del trabajador quejoso, por las normas constitucionales y

ordinarias antes analizadas, como es la gratuidad de los actos y actuaciones derivados del juicio laboral, en que dicho quejoso fue parte actora, ya que por medio de los precitados actos reclamados se pretende gravar, por concepto de derechos de Registro Público de la Propiedad, la inscripción del embargo decretado en dicho juicio laboral a favor del trabajador actor, aquí recurrente y se negó la inscripción de tal embargo, por falta de pago de ese derecho.

En la sentencia recurrida quedó inadvertida la naturaleza jurídica de los actos reclamados, al catalogarse este asunto como un amparo contra leyes o en materia constitucional, porque se reclamó una ley que formalmente comparte tal naturaleza, pero sin observar que materialmente afecta un derecho laboral, tutelado por las normas constitucionales y ordinarias antes examinadas, lo que determina su clasificación como un amparo en materia de trabajo, dándose por consiguiente la justificación necesaria para aplicar, a favor del quejoso, la institución de la suplencia de la queja deficiente, en forma amplia o total, aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, como lo interpretó esta Segunda Sala en la Jurisprudencia 2ª. J. 39/95, antes transcrita.

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y su estudio, de oficio, o bien, a petición de parte, es preferente al de fondo de la controversia constitucional planteada.



En este caso, de oficio, se advierte que en contra de los actos legislativos consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la ley reclamada, atribuidos al Congreso, al Gobernador y al Secretario de Gobierno, todas autoridades del Estado de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que no afectan la esfera de interés jurídico del quejoso, por las consideraciones que a continuación se formulan:

El artículo 22, fracción IV, dispone:

"ARTÍCULO 22.- Los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, causarán derechos conforme a la tasa, tarifas y cuotas siguientes: --- I... II... III... IV.- La inscripción o la reinscripción de todo tipo de embargos incluyendo los laborales y fiscales, así como providencias precautorias, a excepción de la de alimentos y avisos preventivos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 2889 del Código Civil, se causará sobre el monto de los mismos 4 al millar".

Como se aprecia de la ley combatida, grava los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Gobierno del Estado de



FORMA 1-15
A 1
A
E ACORDADO.

Guerrero, entre otros conceptos, por la inscripción de los embargos laborales.

Sin embargo, el servicio que presta la mencionada Dirección y que pretende gravar la ley reclamada, lo realiza como auxiliar de la administración de justicia en materia de trabajo y recae sobre una actuación ordenada en un conflicto obrero-patronal, como es el embargo laboral practicado en una controversia de esta naturaleza.

Luego, dado el régimen de gratuidad de los actos y actuaciones relacionados con la administración de justicia en materia de trabajo, que se desprende de los artículos 17, 73, fracción X, 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 19, 685, 962 y 975, fracción II, inciso B), de la Ley Federal del Trabajo, antes examinados en cuanto a su contenido y alcance, determinan en este caso la inaplicabilidad en perjuicio del quejoso del combatido artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2000.

Por lo mismo, los actos legislativos reclamados, al no poder tener un ámbito de aplicación concreta para sustentar el gravamen relacionado con el servicio de inscripción del embargo laboral, es claro que su sola vigencia no afecta la esfera de interés jurídico del quejoso, por lo que en contra de tales actos y autoridades se actualiza la causal de improcedencia de este juicio de garantías, prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo y lo que procede, con fundamento en el artículo



fracción III, de la ley de la materia, es revocar la sentencia recurrida en que se negó la protección de la Justicia Federal, por lo que ve a dichos actos y autoridades y, en su lugar, sobreseer en el presente juicio de amparo.

QUINTO.- Sentadas las bases del por qué este asunto se considera un juicio de amparo en materia de trabajo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede suplir la queja deficiente en los planteamientos de la demanda de amparo, para advertir, de oficio, que el acto de aplicación de la ley reclamada viola, en perjuicio del quejoso, las garantías de la debida fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 constitucional, como enseguida se evidenciará. Previamente cabe señalar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17, 107, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 84, fracción III y 182 de la Ley de Amparo y 21, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ejerce la facultad de atracción para conocer de la citada cuestión de legalidad, en aras de la economía procesal, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la impartición de justicia en forma pronta.

En efecto, el acto concreto de aplicación aludido, consistente en el oficio 88 de dos de marzo de dos mil, suscrito por la autoridad responsable Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, es del tenor literal siguiente:

"LABORAL [REDACTED] --- EL QUE SE INDICA. ---
Acapulco, Gro., a 2 de Marzo del 2000 --- C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. --- C I U D A D . ---
En atención a su oficio No. 244 de fecha 28 de
enero del año en curso, mediante el cual remite
esta Delegación para su inscripción copia
certificada del acta de embargo deducido del Juicio
al rubro citado promovido por SABINO
CASTREJÓN MARQUINA en contra de [REDACTED]
[REDACTED] Y OTROS, al respecto y por medio
del presente me permito informarle que no procede
lo solicitado, toda vez que para dar cumplimiento a
lo solicitado, deberá acreditar con el Recibo Oficial
haber realizado el pago por concepto de derechos
de Registro Público de la Propiedad. --- Con
fundamento en el art. 22 fracción IV de la Ley de
Ingresos del Gobierno del Estado."

Del examen del transcrito oficio se aprecia que la autoridad responsable emisora, indebidamente se apoyó en el precepto legal, que antes se estimó inaplicable, para negar la inscripción del embargo laboral, en tanto no se cubriera el pago del derecho calculado sobre el monto del mismo 4 al millar.

Tal actuación resulta contraria a lo establecido por los artículos 17, 73, fracción X y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 19, 685, 962



75, fracción II, inciso B), de la Ley Federal del Trabajo, que previenen el régimen de gratuidad de los actos y actuaciones derivados de la administración de justicia en materia de trabajo, y, por ende, del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, que exige que todo acto de molestia de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. La adecuada fundamentación consiste en que la norma legal en que se apoya el acto de autoridad, en realidad tenga una clara e indiscutible aplicación a la situación de hecho o de derecho que pretenda regir. En este caso, el oficio reclamado incumple con los aludidos requisitos, porque la ley que le sirve de fundamento legal no puede aplicarse al hecho o situación jurídica que pretende regir, como es el cobro del derecho por concepto de la inscripción de un embargo laboral, dado aquel régimen de gratuidad que impera en dichos actos.

Por lo mismo, procede revocar la sentencia recurrida en la parte que negó el amparo y, en su lugar, otorgarlo, para el efecto de que la responsable indicada, deje insubsistente el oficio reclamado e inmediatamente realice la inscripción del embargo laboral, sin exigir el acreditamiento del pago del derecho correspondiente.



En consecuencia por todo lo dicho en este y en los anteriores considerandos debe revocarse la sentencia recurrida, sobreseerse en el juicio en relación con los actos relativos al artículo 22, fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero y otorgarse el amparo respecto del oficio 88 de dos de marzo de dos mil, para los efectos precisados.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por SABINO CASTREJÓN MARQUINA, en contra de los actos que reclama al Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno todos del Estado de Guerrero, consistentes respectivamente en la aprobación expedición, promulgación, publicación y refrendo del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año dos mil.

TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a SABINO CASTREJÓN MARQUINA, en contra del acto que reclama del Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, consistente en el oficio 88, de dos de marzo de dos mil, en que se declaró improcedente la inscripción de embargo ordenada en el juicio laboral [REDACTED] del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.

Notifíquese; y con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente.

SUPLENTE
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA D

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los



Honores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y como Presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue Ponente el Señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano quien estuvo ausente, haciendo suyo el proyecto el Señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Firman el Ministro Presidente y Ministro que hizo suyo el proyecto en ausencia del Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

P R E S I D E N T E:

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

HIZO SUYO EL PROYECTO
EN AUSENCIA DEL PONENTE

MINISTRO MARIANO AZUELA GUITRÓN.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTÍZ.

Esta hoja forma parte del amparo en revisión número 845/2000, promovido por SABINO CASTREJÓN MARQUINA, fallado el veintiséis de enero año dos mil uno, por unanimidad de cinco votos en el sentido siguiente: PRIMERO.- Se revoca la sentencia sujeta a revisión.---SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por SABINO CASTREJÓN MARQUINA, en contra de los actos que reclama al Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno todos del Estado de Guerrero, consistentes respectivamente en la aprobación expedición, promulgación, publicación y refrendo del artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal del año dos mil.--- TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a SABINO CASTREJÓN MARQUINA, en contra del acto que reclama del Delegado Regional de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, consistente en el oficio 38 de dos de marzo de dos mil, en que se declaró improcedente la inscripción de embargo ordenada en el juicio laboral [REDACTED] del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.--- Conste

En términos de lo previsto en los artículos 116 y 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.